

Brensley Pledges Legal Support to DiZoglio for the Audit

Anne Brensley, the Republican Secretary of State nominee, pledges that if elected in November, she will make the Secretary of State’s office legal resources available to support State Auditor DiZoglio’s effort to carry out an audit of the Massachusetts Legislature.

Brensley says the commitment would include using the Secretary of State’s robust legal staff to support enforcement of the voter-approved audit law.

“Secretary of State Galvin has pledged to do whatever he has to, including getting drones, to fight Trump. I am pledging to do whatever I have to, including using the office’s legal team, to enforce the audit,” Brensley said.

The dispute centers on a 2024 statewide ballot question that amended Massachusetts law to expressly authorize the State Auditor to audit the Legislature. Question 1 passed with about 72 percent of the vote, with more than 2.3 million voters supporting it. The amended law took effect on December 5, 2024.

Since then, DiZoglio’s office and legislative leaders have remained locked in a dispute over the law's scope and enforcement. DiZoglio has argued that the voter-approved measure gives her office authority to examine the General Court's accounts, programs, activities, and functions and to obtain the records needed to conduct the audit. Legislative leaders have disputed the auditor’s interpretation of the law and have raised constitutional and separation-of-powers concerns.

Brensley says her own legal battle over the audit shows why she believes the Secretary of State’s office should take a more active role in enforcing the ballot, which enforces the will of the voters.

In October 2025, Brensley filed a lawsuit against Mariano and Spilka in Middlesex Superior Court. In her complaint, she sought a declaration that the Legislature’s internal auditing procedures did not satisfy the voter-approved law and asked the court to order legislative leaders to provide DiZoglio with the records necessary to conduct the audit.

Brensley also challenged the argument that DiZoglio’s previous service as a legislator prevents her from conducting the audit. Her lawsuit sought a declaration that the law does not disqualify the State Auditor from auditing the Legislature based on her prior legislative service.

The Attorney General’s office defended the legislature, raising serious questions about the impartiality of the Attorney General’s role in choosing to defend one division of the state’s government over another. The assistant attorney general argued Brensley was “nothing more than a Massachusetts citizen.” Brensley criticized that remark by reminding the assistant attorney general that he works for the people of the state, not the other way around.

“State Auditor DiZoglio has single-handedly been fighting for the audit and in doing so is single-handedly fighting for the will of the people,” Brensley said.

“The fight has been uneven. She will get the full legal backing of the Secretary of State’s office if I win in November.”

The proposed role for the Secretary of State’s office would significantly expand Brensley’s stated involvement in the audit dispute. Rather than relying solely on the Auditor’s office or litigation initiated by individual citizens, Brensley says she would use the Secretary of State’s office legal authority to support enforcement of the law.

The issue has become one of the more prominent disputes over the separation of powers in Massachusetts state government. DiZoglio’s office maintains that voters expressly amended state law to authorize an audit of the Legislature, while legislative leaders and the Attorney General have questioned the auditor’s authority, the constitutional separation of powers, and the procedures governing litigation involving state officials.

For Brensley, however, the issue is fundamentally one of accountability. “The people voted for this audit,” Brensley said. “The Secretary of State should not stand on the sidelines when the enforcement of a voter-approved law is being challenged. They are the protector of the ballot.”

Brensley says a fundamental difference between the current Secretary of State, Bill Galvin, and herself, is she is focused on issues within this state, while he is focused on fighting Trump. “It’s just a fundamental difference in leadership focus. Voters get to decide what they want prioritized.”

Brensley Promete Apoyo Legal a DiZoglio Para la Auditoría

Anne Brensley, candidata republicana a Secretaria de Estado, se ha comprometido a que, de resultar elegida en noviembre, pondrá a disposición los recursos legales de la oficina de la Secretaría de Estado para apoyar la iniciativa de la Auditora Estatal DiZoglio de realizar una auditoría de la Legislatura de Massachusetts.

Brensley afirma que este compromiso incluiría recurrir al sólido equipo jurídico de la Secretaría de Estado para brindar apoyo legal en la aplicación de la ley de auditoría aprobada por los votantes.

«El Secretario de Estado Galvin ha prometido hacer lo que sea necesario, incluso utilizar drones, para luchar contra Trump. Yo me comprometo a hacer lo que sea necesario, incluido el uso del equipo legal de la oficina, para hacer cumplir la auditoría», declaró Brensley. La disputa gira en torno a una consulta popular estatal de 2024 que modificó la legislación de Massachusetts para autorizar expresamente a la Auditora Estatal a auditar la Legislatura. La «Pregunta 1» fue aprobada con aproximadamente el 72 por ciento de los votos, con el respaldo de más de 2,3 millones de electores. La ley modificada entró en vigor el 5 de diciembre de 2024.

Desde entonces, la oficina de DiZoglio y los líderes legislativos han mantenido un conflicto sobre el alcance y la aplicación de la ley. DiZoglio ha argumentado que la medida aprobada por los votantes otorga a su oficina la autoridad para examinar las cuentas, programas, actividades y funciones de la Asamblea Legislativa (General Court), así como para obtener los registros necesarios para llevar a cabo la auditoría. Por su parte, los líderes legislativos han cuestionado la interpretación de la ley realizada por la auditora y han planteado objeciones de índole constitucional y relativas a la separación de poderes.

Brensley sostiene que su propia batalla legal en torno a la auditoría demuestra por qué considera que la oficina de la Secretaría de Estado debería desempeñar un papel más activo en la implementación de la medida aprobada en las urnas, que refleja la voluntad de los votantes.

En octubre de 2025, Brensley presentó una demanda contra Mariano y Spilka ante el Tribunal Superior del condado de Middlesex. En su demanda, solicitó una declaración judicial que estableciera que los procedimientos de auditoría interna de la Legislatura no cumplieran con la ley aprobada por los votantes, y pidió al tribunal que ordenara a los líderes legislativos que facilitaran a DiZoglio los registros necesarios para llevar a cabo la auditoría.

Brensley también refutó el argumento de que la trayectoria previa de DiZoglio como legisladora le impide realizar dicha auditoría. Su demanda buscaba una declaración judicial que confirmara que la ley no inhabilita a la Auditora Estatal para auditar a la Legislatura por su experiencia legislativa previa.

La oficina del fiscal general defendió a la Legislatura, lo que suscitó serios interrogantes sobre la imparcialidad de su papel al optar por defender a una rama del gobierno estatal frente a otra. La fiscal general adjunta argumentó que Brensley no era "más que una ciudadana de Massachusetts". Brensley criticó tal afirmación, recordando al fiscal adjunto que él trabaja para el pueblo del estado y no a la inversa.

"La Auditora Estatal DiZoglio ha luchado en solitario por la auditoría y, al hacerlo, también lucha en solitario por la voluntad del pueblo", declaró Brensley. "Ha sido una lucha desigual. Contará con el respaldo legal pleno de la oficina del Secretario de Estado si yo gano en noviembre".

El papel propuesto para la oficina del Secretario de Estado supondría una ampliación significativa de la participación declarada de Brensley en la disputa sobre la auditoría. En lugar de depender exclusivamente de la oficina de la Auditora o de litigios iniciados por ciudadanos particulares, Brensley afirma que utilizaría la facultad legal de la oficina del Secretario de Estado para apoyar el cumplimiento de la ley.

Esta cuestión se ha convertido en una de las disputas más destacadas sobre la separación de poderes en el gobierno estatal de Massachusetts. La oficina de DiZoglio sostiene que los votantes modificaron expresamente la legislación estatal para autorizar una auditoría de la Legislatura; por su parte, los líderes legislativos y el fiscal general han cuestionado la autoridad de la auditora, el principio constitucional de separación de poderes y los procedimientos que rigen los litigios en los que intervienen funcionarios estatales.

Para Brensley, sin embargo, el asunto es fundamentalmente una cuestión de rendición de cuentas. "El pueblo votó a favor de esta auditoría", afirmó Brensley. «El Secretario de Estado no debe permanecer al margen cuando se impugna la aplicación de una ley aprobada por los votantes. Es el defensor del proceso electoral».

Brensley afirma que una diferencia fundamental entre el actual Secretario de Estado, Bill Galvin, y ella es que ella se centra en cuestiones propias del estado, mientras que él se concentra en luchar contra Trump. «Es simplemente una diferencia fundamental en el enfoque de liderazgo. Los votantes son quienes deciden qué debe tener prioridad».